

Naciones Unidas
**ASAMBLEA
GENERAL**

NOVENO PERIODO DE SESIONES
Documentos Oficiales



SEXTA COMISION, 417a.
SESION

Lunes 8 de noviembre de 1954,
a las 10.45 horas

Nueva York

SUMARIO

	Página
Tema 51 del programa:	
Cuestión de la definición de la agresión: informe de la Comisión Especial para la Cuestión de la Definición de la Agresión (<i>continuación</i>)	109

Presidente: Sr. Francisco V. GARCIA AMADOR
(Cuba).

TEMA 51 DEL PROGRAMA

Cuestión de la definición de la agresión: informe de la Comisión Especial para la Cuestión de la Definición de la Agresión (A/2638, A/2689 y Add.1, A/C.6/L.332/Rev.1, A/C.6/L.334/Rev.1, A/C.6/L.335/Rev.1, A/C.6/L.336/Rev.1, A/C.6/L.337) (*continuación*)

EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DE LAS PROPUESTAS PRESENTADOS A LA COMISIÓN (*continuación*)

1. El Sr. CHOT (Bélgica) observa que si bien ha terminado el debate general, es tal la complejidad y discrepancia en los proyectos de resolución presentados a la Comisión que la discusión de estos textos no se diferencia mucho del debate general. Prolongar semejante discusión no puede ser de ninguna utilidad, pues se han hecho ya todas las concesiones que podían esperarse en el actual período de sesiones y las posiciones de todas las delegaciones han tomado forma concreta.

2. En consecuencia el orador insta a la Comisión a que decida la cuestión del procedimiento que se ha de seguir. Como explicó el representante de Francia (416a. sesión), sólo existen tres posibilidades. La primera consiste en someter a votación las distintas definiciones que se han propuesto, cosa que entraña el peligro de que sean rechazadas todas o de que se apruebe una de ellas por una mayoría tan escasa que luego sea rechazada por la Asamblea General, con lo cual la cuestión dejaría de figurar en su programa. La segunda consiste en remitir el asunto a un grupo de trabajo, del cual difícilmente cabe esperar que logre superar las dificultades que la Comisión no ha podido vencer; ese procedimiento sólo serviría para aplazar unos cuantos días el fracaso definitivo. La tercera posibilidad, con mucho la más prometedora y razonable, es la de encargar la tarea de la definición de la agresión a una comisión especial, como propusieran las delegaciones del Líbano, Siria y Yemen (A/C.6/L.337).

3. El representante de Bélgica propone una enmienda a dicho proyecto, según la cual se pediría a la Comisión Especial que presente su informe a la Asamblea General en el undécimo período de sesiones y no en el décimo. La experiencia anterior muestra que conforme

pasa el tiempo es más fácil conciliar las opiniones; en dos años más, es posible que las actuales negociaciones en torno al desarme hayan concluido felizmente, con lo cual se facilitará grandemente la tarea de la definición de la agresión; por otra parte, el programa del décimo período de sesiones está ya muy recargado. El aplazamiento por dos años del asunto acrecentará notablemente las posibilidades de llegar a una definición generalmente aceptable.

4. El Sr. ROLING (Países Bajos) dice que el proyecto de resolución de la URSS (A/C.6/L.332/Rev.1) ha sido objeto de críticas prácticamente universales. Su defecto principal es su insistencia en una aplicación automática del principio de que es atacante el que dispara primero; el agresor potencial podría muy bien "arreglar" que el primer disparo fuera el de su futura víctima. Además, se acepta que un incidente fronterizo no constituye agresión, por lo cual el principio del primer disparo no puede considerarse decisivo. La historia reciente muestra que no siempre es fácil trazar la línea divisoria entre los incidentes fronterizos y la agresión. Así por ejemplo, los combates que se efectuaron en la frontera de Rusia y Manchuria en 1938 y 1939 fueron considerados entonces como incidentes de frontera y motivaron la organización de una comisión de fronteras. En 1946, sin embargo, durante los procesos de Tokio, estos incidentes fueron calificados de guerras contra la URSS. En consecuencia, el que se clasifique un hecho como incidente fronterizo o como guerra, parece estar sujeto al poder del Estado interesado. Puesto que cualquiera de los actos mencionados en el párrafo 1 del proyecto de resolución de la URSS puede constituir un simple incidente fronterizo, el principio del primer disparo es a la vez inútil y peligroso.

5. El párrafo 5 del proyecto de resolución de la URSS, que reconoce los poderes discrecionales absolutos del Consejo de Seguridad, parece de escasa utilidad como principio que pueda servir de orientación cuando se trate de determinar quién es el agresor. Del párrafo 6 parece deducirse que la agresión puede estar justificada en ciertas circunstancias. Tal suposición es errónea, pues la agresión nunca puede estar justificada. En cambio, el empleo de la fuerza puede justificarse en alguna de las circunstancias expresamente indicadas en el párrafo 6. Por ejemplo, la violación de un tratado de desarme o de un tratado que prohíba la producción de armas nucleares puede exigir el empleo de contramedidas de fuerza. Este hecho fué reconocido cuando la Asamblea General, en su resolución 191 (III), aprobó el primer informe de la Comisión de Energía Atómica. El párrafo 7 del proyecto de resolución de la URSS es una disposición particularmente cínica. Los derechos que confiere al Estado amenazado nunca se han puesto en duda, en tanto que su categórica prohibición de cruzar la frontera como medida defensiva al parecer, obliga al Estado víctima a aguardar

dar resignadamente su fin. La actitud cada vez menos favorable de la Comisión a la aprobación de la propuesta de la URSS indica claramente que hay que buscar la solución en otra parte.

6. La delegación de los Países Bajos no puede tampoco dar su apoyo al proyecto de resolución del Paraguay (A/C.6/L.334/Rev.1). El texto usa términos ajenos a la Carta y carece de unidad, en tanto que la fórmula general está reñida con los ejemplos que se enumeran.

7. Si bien el proyecto del Paraguay se apoya en el Artículo 39 de la Carta, emplea el término nuevo "agresión armada". Otras expresiones que se utilizan en su texto o bien no se mencionan en la Carta o bien se les emplea en un sentido diferente al que allí tienen. Si estas expresiones implican un nuevo punto de vista jurídico resultan inaceptables, pues la Comisión no tiene autoridad para variar la norma jurídica. Si por otra parte, se quiere aludir a la situación jurídica vigente, procedía usar las mismas expresiones que se emplean en la Carta.

8. Aunque el párrafo 1 del proyecto de resolución del Paraguay especifica que la agresión armada sólo puede cometerse mediante el empleo de fuerzas armadas, el párrafo 2 recomienda que también se califique como agresión armada la declaración de guerra y la organización de bandas armadas con fines agresivos. El representante de Paraguay explicó que es preciso mencionar estas dos posibilidades porque, aunque no constituyen empleo de fuerzas armadas, no por eso dejan de ser amenazas tan graves del uso de fuerza que pueden equipararse a una agresión armada. En circunstancias excepcionales la amenaza de la fuerza puede equivaler a la agresión, pero no parece lógico clasificar como agresión la organización o tolerancia de bandas armadas, sin la concurrencia de otras circunstancias, cuando al propio tiempo no se considera como tal la organización de enormes ejércitos.

9. El proyecto conjunto de resolución propuesto por Irán y Panamá (A/C.6/L.335/Rev.1) limita la agresión al uso de la fuerza armada sin mencionar la amenaza inmediata de dicho uso ni el uso de la fuerza contra un territorio que se encuentre sometido a régimen internacional. De este modo, y aun cuando no se hayan previsto estas dos contingencias importantes, el incidente de fronteras o el uso de la fuerza armada para capturar a un delincuente fugitivo pueden equipararse a la agresión. Es evidente que hay que precisar la palabra "fuerza". Refiriéndose al párrafo 2 de la parte dispositiva, expresa el orador que si los ejemplos enumerados constituyen agresión "en todo caso", la frase introductoria carece de sentido. Además, algunos de los actos enumerados en el inciso d) del párrafo 2, tales como la organización o tolerancia de bandas armadas, no suponen el uso de fuerza. Por estas razones, la delegación de los Países Bajos no puede dar su apoyo al proyecto conjunto de resolución.

10. La propuesta de China (A/C.6/L.336/Rev.1) adolece de los mismos defectos que el proyecto conjunto. No todo empleo ilegítimo de la fuerza constituye agresión. Además, el proyecto de resolución de China cita entre sus ejemplos algunos actos que sólo equivalen a amenazas. Finalmente, el párrafo 3 de la parte dispositiva parece incomprensible. No está claro cuáles son las medidas que se prevén. Si éstas equivalen al uso de la fuerza se establece una distinción entre dicho uso de la fuerza y el "ataque armado". Si, por otra parte, las medidas no equivalen al uso de la

fuerza, la disposición no viene al caso en una definición de la agresión. Por todos estos motivos, el proyecto de resolución de China resulta también inaceptable para la delegación de los Países Bajos.

11. A juicio de muchas delegaciones, la definición de la agresión tiene dos aspectos. Por una parte, debe indicar qué formas de recurso a la fuerza se prohíben y, por la otra, qué formas de responder a la fuerza con la fuerza son permisibles. A este respecto debe subrayarse que aun en el caso de que el tipo de agresión que justifica la intervención del Consejo de Seguridad conforme al Artículo 39 de la Carta fuera el mismo que de acuerdo con el Artículo 51 puede justificar la legítima defensa, este último Artículo tiene un carácter más restringido. Pero, en todo caso, cuanto más amplia sea la definición que prohíbe la agresión, más amplio será el alcance de lo que por inferencia se admite como legítima defensa.

12. Es interesante examinar la actual situación jurídica. En primer lugar, no hay razón para suponer que todos los actos prohibidos por el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta son actos de agresión. Dicho Artículo traza solamente el perímetro dentro del cual se sitúa el concepto de agresión. En segundo lugar, el Artículo 39 supone que la agresión es una forma específica de quebrantamiento de la paz, aproximándose así a la antigua noción de la guerra. En tercer lugar, en casos excepcionales, el Artículo 51 autoriza las represalias armadas antes de que intervengan las Naciones Unidas. La función de mantener la paz y la seguridad que corresponde a las Naciones Unidas explica por sí sola por qué la agresión y la legítima defensa no son complementarias. Cualesquiera que hayan sido las experiencias en el pasado, en la actualidad pueden producirse casos de agresión que justifiquen la intervención del Consejo de Seguridad, pero no la guerra defensiva. En consecuencia, la Comisión debe recordar que está definiendo tan sólo la agresión y no la legítima defensa. El problema de la legítima defensa puede dejarse de lado, aunque se haga alguna referencia al Artículo 51.

13. De aceptarse esta tesis, es indispensable hacer un examen más atento del párrafo 4 del Artículo 2. No todo uso prohibido de la fuerza está comprendido dentro del concepto de agresión. La práctica de la Sociedad de las Naciones demuestra que los incidentes de frontera no pueden clasificarse nunca como actos de agresión. El conflicto grecobúlgaro de 1925 ofrece un notable ejemplo de ello. De modo análogo, el conflicto entre el Paraguay y Bolivia en 1934 dió motivo a una acción internacional en la que se reconoció explícitamente que el principio del primer disparo no es decisivo.

14. Cuando la Carta menciona el uso de la fuerza contra la independencia política o la integridad territorial de un Estado, se refiere a una acción asimilable a la guerra. Cuando dicha acción se dirige contra un territorio bajo régimen internacional o cualquier otro territorio no autónomo, corresponde indudablemente a la misma categoría, y está prevista en la frase final del párrafo 4 del Artículo 2. Sin embargo, cuando se indica la calidad de la fuerza que se requiere para constituir agresión, es aconsejable referirse únicamente a la fuerza dirigida contra un Estado. Enumerar todos los otros casos de agresión sería una tarea difícil. A este respecto, la referencia que se hacía en una propuesta reciente de los Países Bajos (410a. sesión, párr. 46) a un territorio bajo régimen internacional, puede suscitar ciertos recelos. Será preferible, pues, limitar la definición a la agresión contra un Estado, dejando

que los órganos competentes decidan otros casos por analogía.

15. Conforme al párrafo 4 del Artículo 2, los Estados también deberán abstenerse de recurrir a la amenaza de la fuerza. Aunque muchas delegaciones han impugnado el reconocimiento de la amenaza como elemento de agresión, los distintos proyectos de definición sometidos a la Comisión, si bien en la fórmula general se circunscriben al uso de la fuerza, citan ejemplos que equivalen simplemente a amenazas de fuerza. Como ha demostrado la historia reciente, las amenazas forman parte de las realidades de la vida internacional. El representante de México reconoció que la amenaza puede lograr los mismos resultados que el uso de la fuerza, pero sugirió luego que no podía incluirse ninguna disposición respecto a las amenazas en una definición de la agresión, pues estos casos pueden ser tratados por los organismos competentes mediante una interpretación inteligente de la definición (415a. sesión). Sin embargo, esta solución se apartaría de la práctica legislativa normal. La definición debe disponer al menos que, en casos excepcionales, una amenaza inmediata de fuerza contra la integridad territorial o la independencia política puede equivaler a la agresión.

16. En los Artículos 39 y 51, la Carta reconoce dos casos en los cuales los Estados están autorizados para recurrir a la fuerza. A este respecto, el problema podría simplificarse, si la definición sólo menciona la legítima defensa individual, sin prejuzgar la cuestión de si las amenazas pueden en algunos casos justificar la legítima defensa. La delegación de los Países Bajos está convencida de que el derecho de legítima defensa incluye el derecho de represalias contra la amenaza inmediata de ataque armado. Según señaló anteriormente el orador, esta opinión está confirmada por los juicios de Nuremberg y Tokio, y por las decisiones de la Asamblea General. El representante de la RSS de Bielorrusia afirmó sin razón que el Sr. Röling había recurrido a precedentes poco comunes (411a. sesión). En el propio texto de la sentencia de Tokio se afirma que los Países Bajos tuvieron derecho a declarar la guerra en respuesta a la amenaza de invasión. Además, pese a los argumentos del representante de Checoslovaquia (413a. sesión), el Tribunal de Nuremberg reconoció en principio el derecho de defensa contra una amenaza inmediata. Finalmente, el orador señala al representante de México, quien aludió a violaciones de los acuerdos de energía atómica, que en el primer informe de la Comisión de Energía Atómica aprobado por la Asamblea General en su resolución 191 (III) se declara que “la violación (del tratado o convención) podría ser de tal naturaleza que justificase el derecho de legítima defensa reconocido por el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”.¹

17. La delegación de los Países Bajos, si bien está perfectamente segura de las premisas en que se funda, estaría de acuerdo en dejar pendiente la cuestión de una amenaza inmediata, pues lo que se precisa ahora es definir la agresión y no la legítima defensa.

18. La delegación de los Países Bajos no comparte la opinión según la cual sería útil y deseable enumerar ejemplos concretos de agresión, además de una fórmula general. Es imposible enumerar todos los hechos que puedan constituir agresión en todos los casos y bajo todas las circunstancias. Los instrumentos internacio-

nales modernos no hablan ya de la guerra sino del uso de la fuerza, como se hace en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta. Este uso de la fuerza incluye todas las actividades análogas a la guerra, sean regulares o paramilitares las tropas que en ellas participen, y cualesquiera que sean las armas o métodos que se empleen.

19. Por estas razones la delegación de los Países Bajos propondría una fórmula general en los términos siguientes:

“La agresión entre Estados, en sus relaciones internacionales, es el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado. En casos excepcionales la amenaza inminente del uso de esa fuerza puede ser equivalente a la agresión. Queda entendido que esta definición nunca podrá interpretarse en forma que abarque los actos de legítima defensa individual ni cualquier otro acto que se ejecute en cumplimiento de una decisión o recomendación formulada por un órgano competente de las Naciones Unidas.”

Esta fórmula revisada de los Países Bajos podría adoptarse ya sea para uso general, ya sea para el código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad.

20. Se han propuesto varios procedimientos con objeto de que la Comisión pueda salir del actual estancamiento. La primera sugestión fué la de constituir un grupo de trabajo. Se han constituido anteriormente cierto número de ellos sin que lograsen ningún resultado positivo. Por lo demás, el siguiente tema del programa de la Comisión es el código de delitos, cuya discusión se vería facilitada si se conocieran antes las conclusiones de la Comisión respecto a la definición de agresión. En consecuencia, la delegación de los Países Bajos sólo dará su apoyo a la creación de un grupo de trabajo si a dicho grupo se le fija un plazo máximo de 24 horas y se le pide que informe a la Comisión en su próxima sesión.

21. La segunda propuesta de procedimiento, la de establecer una comisión especial, aparece en el proyecto conjunto de resolución presentado por el Líbano, Siria y Yemen (A/C.6/L.337). Pero cabe recordar que una comisión especial anterior no logró ningún resultado, no obstante el empeño puesto en sus trabajos. Además, la comisión especial propuesta tendría que informar a la Asamblea General en su décimo período de sesiones, período en que de todos modos estará muy recargado el programa de la Sexta Comisión. La delegación de los Países Bajos se opondrá, pues, enérgicamente a que la comisión especial, si llega a constituirse, informe en el próximo período de sesiones.

22. El representante de los Estados Unidos ha sugerido que se sometan a votación y se rechacen todos los proyectos de resolución, y que se dé por concluido definitivamente el examen del tema. La delegación de los Países Bajos cree que debe continuar el debate y que las proposiciones deben someterse a votación al terminar éste. Mientras tanto, tal vez puedan ser de utilidad los esfuerzos que durante 24 horas dedique a esta cuestión un grupo de trabajo. Si las diversas actitudes siguen siendo inconciliables hasta el fin, y no se logra una amplia mayoría en favor de una definición, la delegación de los Países Bajos apoyará un prolongado aplazamiento del estudio del tema e incluso estaría dispuesta a que se renunciase a seguir estudiándolo.

23. El Sr. JORDAN (Bolivia) hace una reseña de los esfuerzos realizados en acuerdos y conferencias in-

¹ Véase *Actas Oficiales de la Comisión de Energía Atómica, primer informe al Consejo de Seguridad, parte III, 4.*

ternacionales para asegurar la solución de las controversias por medios pacíficos y prevenir las guerras de agresión. En particular, la Sexta Conferencia Internacional Americana condenó la agresión y el fomento de las guerras civiles. En la Séptima Conferencia, México propuso un proyecto de código de paz en el que figuraba una definición enumerativa de la agresión. La Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz encomendó a su comité de expertos que examinase una propuesta de Bolivia sobre la definición de la agresión y el castigo del agresor. El Pacto de París (1928) y el Tratado Antibélico de no Agresión y Conciliación (1933) establecieron un procedimiento para solucionar las controversias por medios pacíficos. La Convención para Coordinar, Ampliar y Asegurar el Cumplimiento de los Tratados Existentes entre los Estados Americanos, firmada en 1936, condenaba las guerras de agresión y estipulaba que todas las cuestiones que afectan a la paz en el hemisferio occidental debían ser resueltas por medios amistosos y pacíficos. La Declaración de Principios Americanos, aprobada en Lima en 1938, prohibía la intervención de los Estados en los asuntos internos de otros Estados y el uso de la fuerza como instrumento de política nacional o internacional. La Tercera y Cuarta Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas establecieron sanciones contra los países que cometieran actos de agresión y obstaculizaran la cooperación para la defensa. En estas reuniones se expresó igualmente apoyo a los esfuerzos para mantener la paz y prevenir la agresión.

24. Desgraciadamente, los diversos instrumentos citados no siempre han podido prevenir los actos de agresión, el desmembramiento del Estado víctima ni la expoliación de sus recursos naturales. El Gobierno de Bolivia cree firmemente que los Estados tienen el derecho de disponer de sus propios recursos naturales, y que la ingerencia de un Estado en la vida económica de otro Estado constituye una forma de agresión (A/2638, anexo, sección V). Esta idea se encuentra igualmente en la resolución 626 (VII) de la Asamblea General, inspirada en un análisis que de esos principios hicieron las delegaciones de Bolivia y Uruguay.

25. Las disposiciones del Capítulo VII, y especialmente del Artículo 51 de la Carta, referentes al derecho de legítima defensa individual o colectiva, concuerdan con las del Capítulo V de la Carta de Bogotá y el artículo 3 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río de Janeiro en 1947.

26. En cuanto al tipo de definición que hay que adoptar, el orador expresa que la delegación de Bolivia está en favor de una definición mixta que mencione la agresión económica.

27. Reservándose el derecho de comentar más detenidamente las diversas propuestas que estudia la Comisión, el Sr. Jordán apoya la sugestión de crear un grupo encargado de formular un texto único, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista que han sido expuestos.

28. El Sr. EL ERIAN (Egipto) observa que, en el proyecto conjunto de resolución de Irán y Panamá (A/C.6/L.335/Rev.1), el texto francés de la última frase del párrafo 1 de la parte dispositiva difiere del texto inglés así como del original español. En el texto francés figura la siguiente frase: *soit l'exécution d'une décision soit l'application d'une recommandation d'un organe compétent des Nations Unies*, mientras que la

versión inglesa simplemente dice *in pursuance of a decision or recommendation of a competent organ of the United Nations*.

29. El Sr. HSU (China) conviene en suprimir el párrafo c) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado por su delegación (A/C.6/L.336/Rev.1) por estimar justificadas las objeciones opuestas por el representante de los Estados Unidos (415a. sesión).

30. En lo que respecta a los comentarios de dicho representante acerca del párrafo 3 del proyecto de resolución, observa que dicho párrafo al referirse a casos de agresión en que no existe ataque armado, tiene por objeto complementar las disposiciones del párrafo 2. Por ejemplo, en el caso de apoyo a la incursión de bandas armadas — que no supone un ataque armado — no procedería la legítima defensa prevista en el Artículo 51. Por otra parte, no se debe privar al Estado víctima de la incursión del derecho de recurrir a medidas que no sean el ataque armado para prevenir dicha actividad hasta que las Naciones Unidas puedan intervenir. La disposición que figura en dicho párrafo en el sentido de que tales medidas no deben suponer un ataque armado hará desaparecer el temor del representante de los Pases Bajos de que ese párrafo podría ser utilizado para justificar la guerra preventiva. Es claro que la disposición no evitará por sí misma que los Estados emprendan guerras preventivas, pero mientras existan las Naciones Unidas, éstas tomarán las medidas apropiadas para poner término a tales guerras. Nada sería más peligroso que dejar de adoptar medidas prácticas contra la guerra preventiva, so pretexto de que está legalmente prohibida.

31. El orador manifiesta que en su anterior exposición (410a. sesión) dió respuesta al representante del Reino Unido en lo que respecta a sus recelos sobre la inclusión de la subversión en la definición. El representante del Reino Unido dudaba de la posibilidad de formular una definición satisfactoria en general. Aunque de los proyectos sometidos a la Comisión ninguno es perfecto, son prueba de que es posible una definición. Refiriéndose a otros puntos planteados por el representante del Reino Unido, el orador declara que el desembarco de las fuerzas aliadas en Islandia podría ser considerado en virtud del derecho internacional actual como una agresión, puesto que ningún Estado puede legalmente desembarcar fuerzas en el territorio de otro Estado sin el consentimiento de éste, obtenido ya sea directamente o en virtud del Artículo 49 de la Carta. Además, aunque es verdad que los agresores siempre pretenden que actúan en legítima defensa, en todos los casos en que lo hagan así, correspondería a los órganos competentes determinar si se ha efectuado un ataque o hay inminencia de un ataque que justifique el empleo de la fuerza en legítima defensa. La Carta prevé solamente dos excepciones a su prohibición de usar la fuerza: la legítima defensa y la acción en cumplimiento de decisiones de las Naciones Unidas. El Artículo 52 no prevé expresamente, como se ha pretendido, la aplicación regional de medidas coercitivas, y aun cuando se admitiera que tal disposición está implícita, dichas medidas sólo pueden ser consideradas como una especie de legítima defensa. La comisión de atrocidades por un Estado contra sus propios nacionales sería, más que un acto de agresión, un delito contra la paz y la seguridad de la humanidad, y la intervención armada en este caso sólo podría estar

justificada si se ejecuta en cumplimiento de una decisión de las Naciones Unidas tomada con arreglo al Capítulo VII de la Carta. En los casos de incidentes fronterizos los órganos competentes deberán decidir si esos incidentes constituyen actos de agresión, tomando en cuenta si ha habido un propósito agresivo de parte de cualquiera de los Estados implicados en ellos.

32. Refiriéndose a las demás propuestas sometidas a la Comisión, el orador es de parecer que el proyecto presentado por la delegación del Paraguay (A/C.6/L.334/Rev.1), así como el de las delegaciones del Irán y Panamá (A/C.6/L.335/Rev.1) adolecen de defectos graves que los hacen inaceptables.

33. Proscritas las guerras de agresión, los agresores en potencia se han visto obligados a concebir nuevos métodos para lograr sus fines. Esto ha hecho que se invente la agresión indirecta. A su vez, ello ha conducido a los intentos de prohibir tal agresión indirecta. A menos que la Comisión se enfrente decididamente con esta situación y adopte una disposición que declare ilegal el fomento de actividades subversivas organizadas, no justificará su existencia. El defecto del proyecto conjunto del Irán y Panamá reside en que, si bien menciona la incursión de bandas armadas y el bloque pacífico, formas ambas de la agresión indirecta, no señala la atención a la agresión indirecta en la parte abstracta de la definición, ni menciona las actividades subversivas organizadas entre los casos enumerados en la parte ilustrativa. Lo que es más, el proyecto habla de "fuerza armada" en la parte abstracta de la definición, lo que, como el representante de China ha señalado en una sesión anterior, no sólo parece excluir la agresión indirecta sino que es contrario al párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta, que sólo se refiere a la "fuerza". Toda definición abstracta debe incluir una referencia a la "amenaza o al uso de la fuerza", o al "uso directo o indirecto de la fuerza".

34. Por lo tanto, el proyecto conjunto de resolución no supone ningún progreso respecto de la definición de *Politis*, acaso porque se han hecho demasiadas concesiones para hacerlo aceptable. El proyecto tampoco es acertado desde un punto de vista científico, por no estar basado en la experiencia. La idea de una definición mixta ha logrado una aceptación general simplemente porque ninguna lista de actos de agresión puede ser exhaustiva; pero, aun así, los actos enumerados deben constituir la base medular de la definición, y el proyecto de resolución excluye los actos de mayor importancia.

35. Se ha sugerido al orador que presente una enmienda al proyecto conjunto de resolución a efecto de incluir la subversión. El Sr. Hsu espera que los mismos autores del proyecto se encarguen de remediar los defectos que ha señalado, de suerte que no sea necesario presentar ninguna enmienda.

36. Algunas delegaciones son de parecer que ciertas disposiciones, cuya inclusión en la definición de la

agresión se ha propuesto, deberían figurar más bien en el proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad. Aun en el caso de que se adoptara dicho código, lo que no es en modo alguno seguro, sería aplicable a los individuos más que a los Estados y constituiría una flagrante injusticia procesar a las personas por delitos que los Estados pueden cometer impunemente.

37. El Sr. OLAVARRIA GABLER (Chile) manifiesta que, aunque no tiene la intención de restringir en modo alguno la libertad de expresión de los representantes, es de parecer que sería conveniente suspender los debates sobre el fondo del asunto y adoptar una decisión acerca de las dos propuestas de procedimiento sometidas a la Comisión.

38. El Sr. HAKIM (Siria) apoya estas observaciones y señala que, con arreglo al artículo 132 del reglamento, la propuesta presentada conjuntamente por Líbano, Siria y Yemen (A/C.6/L.337) debe ser sometida a votación en primer término.

39. Después de un breve cambio de pareceres, el PRESIDENTE invita a la Comisión a que prosiga el debate tanto en cuanto al fondo como sobre las propuestas de procedimiento presentadas.

40. El Sr. MAHONEY (Estados Unidos de América) dice que el procedimiento que se propone en el proyecto conjunto del Líbano, Siria y Yemen (A/C.6/L.337) no conducirá probablemente a ningún fin útil. La labor realizada durante los dos últimos años con respecto a la cuestión de la definición de la agresión, no ha aminorado las dificultades existentes; en cuestiones de esta índole, la reiteración de opiniones divergentes tiende a hacerlas más inflexibles. A juicio del orador, una pausa en las deliberaciones, que dé oportunidad para considerar con calma el asunto, ofrece la mejor esperanza de llegar a una solución satisfactoria.

41. Otra razón para no constituir una comisión especial es que, en su décimo período de sesiones, la Asamblea General considerará la cuestión de revisar la Carta. Si, como espera el Gobierno de los Estados Unidos, se convoca a una conferencia para la revisión de la Carta, habrá ocasión de examinar toda la cuestión de la paz y la seguridad internacionales, y se podrá obtener una nueva perspectiva en cuestiones tales como la agresión. En todo nuevo examen de la cuestión de definir la agresión, los Gobiernos desearán tener en cuenta los elementos aportados por la revisión de la Carta y las negociaciones sobre el desarme. La creación de una comisión especial es innecesaria y podría interpretarse como un recurso para salvar las apariencias. Sería preferible dejar la cuestión en suspenso, y dar a los Gobiernos tiempo para fortalecer su cooperación en esferas estrechamente vinculadas, antes de proseguir el examen del problema de la agresión.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the members of the committee.